

VÍCTOR FLORES OLEA

# Militarización de la sociedad

La guerra al narcotráfico: Felipe Calderón la hizo su prioridad de prioridades, aquello por lo cual valía la pena hipotecar el sexenio, costara lo que costara. Hoy se empiezan a recoger los saldos negativos de la apuesta. Claro que el «crimen organizado» es actualmente en México un terrible agente de descomposición social, no sólo porque significa la enfermedad sino porque el negocio multibillonario está sometido no únicamente a las leyes del mercado de estupefacientes sino a batallas despiadadas entre gánsteres.

Prioridad de prioridades y expediente mediático. Pero, ¿se justifica el derrotero elegido por Calderón? Ya a los pocos meses de iniciada la guerra, como decía, han surgido la polémica, las contradicciones y los peligros. Y los motivos de fondo de la decisión. Por un lado, no hay duda de que constitucionalmente el ejército está impedido para desplegar actividades de policía interna. Pero además de la inconsistencia jurídica, se le están imponiendo al ejército tensiones adicionales que lo perjudican profundamente, ahora y en el futuro, y que se transfieren a la sociedad entera con toda su carga negativa.

Una primera consecuencia lamentable que salta a la vista: el ejército cazando delincuentes entre el pueblo se convierte en un irremediable violador de los derechos humanos, con su consecuente degradación y la degradación del gobierno que lo dirige. Pero no solamente queda en entredicho el honor del ejército sino que sectores cada vez más amplios de la sociedad repudian ya este papel que se le hace desempeñar al ejército, y sin duda terminarán por perderle el respeto, por despreciarlo y temerlo.

\* La presente sección se nutre de las intervenciones en la mesa redonda *Paramilitarización y narcotráfico*, como parte del Foro Político *México y el Mundo actual*, que se sessionó en el Centro de Cultura Casa Lamm, el 25 junio del presente año, auspiciado por el periódico *La Jornada* y dicha institución.

Porque además de la general violación de los derechos humanos, que denuncian ya distintas instituciones como Amnistía Internacional (no puede dejar de mencionarse la familia ultimada a tiros cerca de Culiacán, los asesinatos de civiles en Michoacán, las violaciones y crímenes en Veracruz), las funciones del ejército como policía hacen que la sociedad sufra en su conjunto la represión que inevitablemente se reproduce en una sociedad militarizada. Tiene lugar desde luego una clara «inhibición» de las movilizaciones sociales, su impedimento y prohibición en términos prácticos, es decir, una nueva situación nacional en que la fuerza prima sobre el derecho y la llamada «seguridad» sobre las prerrogativas consagradas en la Constitución. La militarización de la sociedad fatalmente es contraria al respeto de los derechos humanos y de los derechos democráticos; más bien estimula su violación y la violencia social generalizada.

Pero además, colocado el ejército en el medio mismo de la corrupción que invade al país, la pregunta es: ¿la corrupción no penetrará profundamente al ejército, del cual ya hay antecedentes nacionales bien conocidos, pero sobre todo antecedentes en otros países como en Colombia? ¿Estamos ya en esa ruta?

En este sentido, por ejemplo, debe explicarse el anémico resultado de la movilización del ejército por lo que hace a delincuentes aprehendidos del narcotráfico, que sólo se explica por el lado de la corrupción. Es claro, cada movimiento del ejército o de la policía se advierte por adelantado al llamado crimen organizado, preparándolo para la respuesta o facilitando su escape.

La prensa diaria ha dado cuenta de una reacción sangrienta de los criminales, que todos los días asesinan a jefes militares, policíacos o civiles de un cierto nivel. ¿Qué persiguen con ello? Seguramente muy diversos objetivos. Amnistía Internacional de Londres, por ejemplo, sostiene que

[1]os gobiernos poderosos y los grupos armados están fomentando «deliberadamente» el miedo «para erosionar los derechos humanos» y crear «un mundo cada vez más peligroso» y tan polarizado como en los peores tiempos de la Guerra Fría.

No se trata únicamente de eventuales acuerdos entre pandillas que libran una guerra sin cuartel por mercados y territorios, sino de un «estilo» coincidente de trabajo para implantar el terror y ablandar a los agentes del gobierno, cualquiera que sea su uniforme o función. Para el personal militar y policíaco, y para los funcionarios involucrados en esta lucha, de la que no escapan jueces y variados agentes judiciales, no queda más que la siniestra alternativa colombiana: «Plata o plomo». Plomo (y flagrantes violaciones humanas), al que también recurren los agentes gubernamentales con la ilusión de «ablandar» a los capos respectivos, y corrupción desencadenada. Tenaza de hierro que ya sufre nuestra sociedad.

Guerra compleja sin duda, pero con la impresión de que el gobierno, con su «prioridad de prioridades» movilizándolo al ejército, se ha lanzado gravemente a la militarización de la sociedad entera, con las terribles consecuencias que ya observamos en el plano de la represión a la protesta social, con la práctica disminución de las libertades y garantías individuales, que a la postre son más destructivas para la República que la acción del propio crimen organizado.

Pero además de estas cuestiones, no hay duda de que se está aplicando a México rápidamente un esquema de ocupación militar coordinado por el gobierno de los Estados Unidos, con la participación de otras corrientes profundamente reaccionarias y antidemocráticas en el mundo de hoy.

Desde luego, existe sin duda la cabal decisión de reproducir en México, a imagen y semejanza, el «Plan Colombia», que ha implicado en la práctica la ocupación de ese país y su trágica subordinación al imperio del norte. Incidentalmente, y para confirmar lo dicho, vale la pena señalar que hace apenas unas cuantas semanas, silenciosamente, se trasladó a México el jefe de la DEA estadounidense en Colombia, David Gaddis, para encabezar aquí las tareas de esa agencia. El Plan para la Seguridad Mexicana, para el cual Felipe Calderón ha pedido apoyo a los Estados Unidos, significaría sin duda, puntualmente, la «colombianización» de México.

En Colombia, la lucha antinarco, apoyada por los Estados Unidos con billonarias ayudas económicas, con

pertrechos militares y entrenamiento de los ejércitos, el regular y el paramilitar, fue en realidad un pretexto para borrar las fronteras entre la lucha antinarco y la lucha antiguerrillera, la lucha en contra de las oposiciones, en sus versiones armadas o políticas. En nuestro país sirve ya como contención política y social a una situación que se ha deteriorado extraordinariamente desde el punto de vista económico y de las desigualdades sociales. En realidad, se trata de contener y si es necesario someter, con el pretexto del narcotráfico y del «terrorismo internacional», a un país, el nuestro, que ha estado sometido durante años a un positivo «terrorismo económico».

Hace poco, en un artículo de *La Jornada*, la periodista argentina Stela Calloni afirmaba que

la nueva mirada de Wáshington sobre la América Latina y el Cono Sur no sólo significa la remilitarización continental, sino también un nuevo avance para que los ejércitos vuelvan a hacerse cargo, como en tiempos de las dictaduras, de la seguridad interior, en el contexto de las ambiciones continentales estadounidenses. Así, los viejos represores rápidamente se ponen de pie. Si los Estados Unidos admiten ya como política propia la tortura, las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos (por ejemplo en Abu Ghraib y Guantánamo), ¿por qué nuestros ejércitos no pueden llevar a cabo esos crímenes sin ser severamente juzgados?

Se ha dicho con plena razón que esta militarización de nuestras sociedades con «otros» pretextos –el narcotráfico o la protesta social o la guerrilla– como la que se lleva a cabo en México, se inscribe en realidad en el proyecto de dominación que implementan los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Estas «iniciativas» yanquis constituyen tenazas a través de las cuales el imperialismo ultraconservador, agresivo y fascista impone su fuerza en la América Latina. En definitiva, y esta es una de las características más siniestras de la situación, el gobierno mexicano ha aceptado expresamente entrar en la esfera geoestratégica y de seguridad nacional estadounidense. Y, por supuesto, ha aceptado

tácita y expresamente servir de área de contención frente a los procesos de cambio de distintos niveles que se desarrollan en los últimos años en la América Latina.

No quiero prolongar demasiado esta parte de mi intervención, porque además los compañeros de la mesa profundizarán seguramente muchos aspectos de esta exposición. Sin embargo, para terminar deseo referirme todavía, brevemente, a un discurso que pronunció en México hace unos cuantos días, con motivo de su visita a nuestro país, ese personaje deleznable que se llama José María Aznar, y que fungió como patíño a Bush y Blair cuando decidieron la invasión a Iraq. Discurso que pronunció Aznar hace apenas una semana en nombre de una Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside él mismo y que muestra otro aspecto de las presiones y peligros que sufre Latinoamérica provenientes de las fuerzas y movimientos más reaccionarios de la actualidad.

El pasquín de la FAES había sido presentado por Aznar hace un par de meses en Filadelfia, en la ultraconservadora Fundación Heritage (uno de los «tanques de reflexión» más derechistas en los Estados Unidos), lleva por título «América Latina: una agenda para la libertad» y, según expresó el español, está concebido para «influir» en las personas que toman decisiones, desde México hasta Brasil. En su discurso, Aznar identificó a los que considera «enemigos de Occidente»: los movimientos indígenas, los terroristas y los altermundistas.

Más concretamente, en su discurso Aznar persigue tres objetivos esenciales: 1) exigir a los países latinoamericanos que se disciplinen sin discusión al poder estadounidense; 2) el ataque destemplado al gobierno de Hugo Chávez (y más indirectamente a la Cuba de Fidel Castro), y 3) el desprecio y exclusión de los pueblos indios y de sus luchas (el ataque es claro a los gobiernos de Bolivia y Ecuador, en sus actuales intentos de cambio y renovación), que son prescindibles ya que no están asentados en los valores occidentales que Aznar y los Estados Unidos defienden y que consideran únicos e intocables. Tal es una de las inmorales afirmaciones de este nuevo colonialista al mismo tiempo ridículo y peligroso.

He aquí algunas perlas sacadas del discurso de Aznar, del que son evidentes los elementos agresivos y pro-

fundamente reaccionarios de quien visita con frecuencia a los altos mandos de nuestro gobierno, el actual y el inmediato anterior.

Entre otras cosas dice Aznar:

Unas veces por conflictos internos, otras por utopías autoritarias y no pocas por prejuicios ideológicos, la América Latina ha quedado al margen de la familia de naciones occidentales a la que pertenece. Pero eso es una anomalía que puede y debe superarse. //Ante la América Latina se abren dos caminos opuestos [sigue afirmando]. Un camino aleja de las sociedades abiertas, libres y prósperas. Tenemos suficiente experiencia histórica para saber cómo acaba esa ruta. Quienes hoy proponen seguir esta vía se nutren de ideas caducas: del populismo revolucionario, del neoestatismo, del indigenismo racista y del militarismo nacionalista. Ninguna de ellas es desconocida en Iberoamérica.

Y sigue más adelante:

El indigenismo radical empieza a ser para la América Latina lo que el nacionalismo es [par]a Europa. El indigenismo racista siembra la división social y agudiza problemas existentes. En estados ya de por sí frágiles, dificulta y daña la integración nacional de todos los ciudadanos. Con su afán por fomentar la segregación entre grupos destruye el concepto de la igualdad del

individuo ante la ley. Donde hay ciudadanos iguales en dignidad y derechos, la retórica indigenista del caudillo pretende crear grupos con diferentes estatutos.

Y todavía:

Sin duda alguna, el futuro de la América Latina pertenece a los latinoamericanos. Pero también es importante que sus principales socios y aliados trabajen con ella para que la región se incorpore de forma plena al grupo de democracias avanzadas. //Por eso somos partidarios de que la América Latina estreche aún más sus lazos con los Estados Unidos. Hay un rancio antiamericanismo, de larga tradición, que culpa de todos los males de la región a la democracia estadounidense. No hay que negar que en el pasado se cometieran errores. Pero hoy los Estados Unidos deben ser un socio fundamental para garantizar el progreso de la región, su anclaje en el mundo democrático y pueden actuar como un garante activo de la libertad y los derechos fundamentales.

No es difícil descubrir la cepa de tantos dislates. Pero sí es importante saber que uno de los principales enemigos del laicismo en México es esa reacción casi medieval que tiene un ojo puesto en el pasado pero el otro, ni tardo ni perezoso, en los negocios que realiza con el imperio. **C**

LAURA CARLSEN

## ¿Guerra contra el narcotráfico o militarización?

Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude a entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora. Este marco ampliado nos da aun más razones para pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presenta graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.

### «Guerra contra el narcotráfico»: Importación directa de los Estados Unidos

La frase «guerra contra el narcotráfico» fue inventada y utilizada por primera vez por el presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al estadounidense actual. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampantes, en ese año Nixon declaró que las drogas eran el «enemigo público número uno».

Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta de que por las características del problema y las responsabilidades, principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenía pocas posibilidades de obtener un impacto grande desde el ejecutivo. Para otorgar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.

Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy –expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad– y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia –incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etcétera.

Después de lanzar la «guerra contra el narcotráfico», Nixon crea varias agencias antidroga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las Leyes Antidroga, y después la DEA, una súperagencia que combinaba agentes de la Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el Abuso de las Drogas para Coordinar Esfuerzos Locales y Federales (ODALE).

Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó a los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del Presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico –el 17 de junio de 1972– un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias antidroga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su Presidente: el robo en las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.

A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y sus excesos, implantó con la guerra contra el narcotráfico un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africanoamericana; el enfoque en la producción y abasto, en lugar del consumo, permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense, y la mano dura canaliza fondos gubernamentales para fortalecer las fuerzas policíacas en lugar de gastar el mismo dine-

ro en programas de salud y educación pública en las comunidades.

Pero quizás la trascendencia del modelo haya sido constituir una herramienta para mantener el control geopolítico. Convertir el tráfico de drogas en asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de los países de tránsito.

Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.

## Plan Colombia

Desde el año 2000, cuando empezó, los Estados Unidos han enviado cuatro mil trescientos millones de dólares al gobierno colombiano, supuestamente para la lucha contra las drogas; el 76% de esa suma para las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados –el precio de la cocaína en los Estados Unidos ha bajado, la droga tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca se ha incrementado en el 42%.

Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y tránsito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencias. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo de contrainsurgencia estadounidense más grande desde Vietnam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.

Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles han aumentado también de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para el Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar en treinta

millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme, el 65% militar en este presupuesto, comparado al 80% de antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política antidroga del Plan Colombia no funciona.

## Desde el Plan Colombia al Plan México

Ahora, a pesar del desastre del Plan Colombia, se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo de 2006 el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes, señaló que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo del Plan Colombia. El Plan México implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentida por el gobierno mexicano. Llámese como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucha mayor participación de los Estados Unidos. Esta participación se da en tres niveles: 1) en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad; 2) en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, y 3) en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de «guerra contra el narcotráfico» en territorio mexicano.

Esta etapa de colaboración entre México y los Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo, con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda trinacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como han hecho los Estados Unidos en el pasado, busca cooptar al

Estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones en relación con la seguridad de los Estados Unidos.

Fechas clave en este proceso son la reunión de Mérida en marzo de 2007 entre los presidentes Bush y Calderón, y la reunión del 11 de enero entre los procuradores de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, y de México, Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron, según la prensa nacional, una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas la DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos de la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.

Sería una simplificación decir que el Plan México es una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de los Estados Unidos para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, y al igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en los Estados Unidos, ofrece pistas de por dónde vamos.

Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicarse o están aplicándose en México se encuentran:

- 1) El creciente papel del ejército en la sociedad. En México, el ejército es una institución fuerte pero mal entrenada para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.

- 2) La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios y empresas privadas, inclusive extranjeras, en tareas de seguridad. En México, el problema de los paramilitares es serio en Chiapas, y con la militarización se espera que empeore, tarde o temprano, por el aumento de armas que puedan llegar a sus manos.

- 3) La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.

También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes extensiones del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y los Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia económica que existe después de trece años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de la soberanía nacional.

Hasta ahora, el resultado principal de la guerra de Calderón contra el narcotráfico ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido en un 50% respecto al pasado año. Para finales de mayo, se habían registrado más de mil asesinatos relacionados con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacia los mercados del consumidor número uno en el mundo: los Estados Unidos.

En resumen, la historia nos muestra que el modelo de «la guerra contra el narcotráfico» tiene una serie de objetivos ocultos y resultados antidemocráticos que atentan contra la paz y la soberanía.

## Conclusiones

En la guerra contra el narcotráfico, confluyen los objetivos de los Estados Unidos con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos buscan extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo han hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por el momento no hace falta mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al Plan México es suficiente para

asegurar que el gobierno panista siga el guión de seguridad escrito en Wáshington.

Por otro lado, Felipe Calderón –un presidente débil y con poca credibilidad popular– decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes: construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar y con el uso de la represión o la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura que no tiene garantizado el control social.

## En resumen

*Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia.* Desde el inicio de su implementación este es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y sin transparencia, eliminando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.

*Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales.* El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en la transición a la democracia.

*Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política* en países donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los disidentes.

*Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional* bajo este esquema. Analizado el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solamente no ha tenido exitosos resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos

ciudadanos y de derechos humanos en los Estados Unidos ha logrado que se mantuviera un tope al número de soldados estadounidenses en territorio colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios en empresas particulares subcontratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.

El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de los Estados Unidos y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplía la red de agentes antidrogas y aduanales

estadunidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.

En este sentido, el ASPAN, la guerra contra el terrorismo de Bush y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses. **C**



FRIDA KAHLO: *La novia que se espanta de ver la vida abierta*, 1943

JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

# Integración profunda y ocupación militar. Políticas de «seguridad militar» de los Estados Unidos en México

## 1. El intervencionismo policial-militar

Bajo la rúbrica de la «guerra» contra el narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo, el gobierno mexicano que encabeza Felipe Calderón (2007-¿?), producto de cuestionados procesos electorales,<sup>1</sup> desató una gran ofensiva militar en varios estados del país que están o estarían realizando procesos comiciales locales y/o estatales, en el contexto de un proceso de corte «oligárquico-imperial» de larga data, que profundiza, como pocas veces en la historia del México independiente, el grado de sometimiento del aparato de seguridad del país a los Estados Unidos. Más que una «globalización», estamos frente a un fenómeno de «imperialización», dado el alto grado en que la iniciativa de Calderón, inspirada en los mismos objetivos de la guerra anti-terrorista desatada por el gobierno de George W. Bush (2001-2008) al amparo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/9), es, en verdad, una manifestación clara del «desborde» del Estado de excepción estadounidense que siguió a los ataques terroristas: también en México se auspician cambios radicales en los ordenamientos policiales y penales incidiendo de manera negativa, como en los Estados Unidos, sobre los derechos humanos, constitucionales y político-económicos de la población. Básicamente, más que enfrentar de manera eficiente el problema del «narcotráfico» cuyas raíces están en la política económica, en el

<sup>1</sup> John Saxe-Fernández: «Fox: Aniquilador de instituciones», *Memoria*, 2006; (212): 30-33, oct.

«prohibicionismo» y en la laxa actuación del sistema financiero para la proliferación, fundamento y ejecución operativa –respectivamente– del fenómeno, se evaden sus causas y sus puntales centrales, pero se le aprovecha como pretexto para «sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y lanzarlas a las calles», como demostración y compensación por la frágil legitimidad que aqueja al gobierno calderonista; dar impulso electoral al Partido Acción Nacional (PAN), en el gobierno, y extender una sombra de *criminalidad* sobre movimientos sociales legítimos de resistencia pacífica surgidos ante las irregularidades electorales. Se trata también de ofrecer una «sombra de seguridad» para la profundización del paquete de medidas auspiciadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conocido popularmente como «neoliberalismo» y que, en realidad, son los elementos constitutivos de la «condicionalidad acreedora» atada a todas las líneas de crédito.<sup>2</sup> En este marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas y Oaxaca, así como las recientes reformas al Artículo 139 del Código Penal Federal, que ahora tipifica al «terrorismo» y el intento de derogar la Ley de Neutralidad.<sup>3</sup>

El lanzamiento por la vía castrense y no policial de esta campaña, cuya incidencia en los equilibrios en la ecuación cívico-militar deben ponderarse cuidadosamente, se registró a pocas semanas de iniciado el gobierno «de facto». Ante lo cual primero cundió el escepticismo y luego la alarma, conforme se fueron mostrando sus resultados, sangrientos, traumáticos. Las críticas no se hicieron esperar, tanto por parte de observadores nacionales como internacionales: la violencia vinculada a la economía informal y en particular al narcotráfico, que conoció un inusitado crecimiento durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), se profundizó y se amplió: en algunas semanas el número de bajas superó las registradas en la guerra contra Iraq.

2 John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado: *Imperialismo en México: las operaciones del Banco Mundial en nuestro país*, México, Random House, 2005.

3 Nydia Egremy: «Entrevista», *ContraLínea*, 11 de junio de 2007.

## 2. De Zedillo a Calderón

La actuación de Calderón en torno al montaje de una vasta operación militar que le ayudase a subsanar su imagen de debilidad tiene semejanzas con la de Zedillo por medio de un gran operativo militar el 9 de febrero de 1995. En efecto, bajo su gobierno se ejerció la Operación Chiapas 1994 elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional, y además es posible un ejemplo del «tercer vínculo»<sup>4</sup> consistente en un amplio plan de contrainsurgencia que se plantea cuando Clinton, en enero de 1995, elabora el plan de rescate de 53 mil millones de dólares para lidiar con la magna crisis económica que enfrentó Zedillo en las primeras semanas de su gobierno. De esta forma se incluyó: 1) la creación de grupos paramilitares; 2) la «neutralización» (léase: eliminación) de los zapatistas; 3) la censura de los medios de comunicación, y 4) el control de los efectos generados por grupos de defensa de derechos humanos.

Esto lleva consigo un plan conjunto en el que los Estados Unidos proveen adiestramiento militar y amplios preparativos y equipo militar para la contrainsurgencia. Es un proceso que implica un extenso programa represivo que culmina con la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Zedillo es, como dice el analista Bellinghousen, «un genocida silencioso». En los dos años previos a esa matanza se asesinaron unas 1500 personas. Se promovieron fuertes medidas militares, como el ataque a comunidades indígenas bajo la máscara de un proceso «pacificador», creando además un ambiente de terror por medio del uso de unidades paramilitares, que operaban –y operan– en total impunidad. Luego de la rebelión zapatista y bajo Chiapas 1994, se crea una unidad llamada Fuerza de Ataque Arco Iris, diseñada para combatir a los zapatistas.

Dos meses antes de las elecciones de 1994, Clinton ofrece 64 millones de dólares para equipo aéreo, incluyendo cuatro helicópteros UH-60 Blackhawk, por un total de 78 millones de dólares. Como ocurre en un grado

4 Me refiero al «vínculo militar», que se agrega al económico y político, reflejados en el TLCAN pactado por la cúpula estadounidense con las oligarquías mexicana y canadiense. Al respecto ver Jeff Faus: *The Global Class War*, Nueva York, Wiley, 2007.

mucho mayor ahora con Calderón, en los Estados Unidos se pensaba que Zedillo era política y militarmente débil. Deciden entonces «apoyarlo». Documentos desclasificados indican que los Estados Unidos, de manera directa y también bajo la cubierta de la guerra contra las drogas, continuarían aumentando los armamentos y adiestramientos para las fuerzas militares de México a fin de que pudieran llevar a cabo una guerra de guerrillas en las montañas por períodos prolongados. Eso se revela en documentos del Departamento de Estado y del Pentágono publicados el 22 de enero de 1998 por *El Financiero*.

El plan de contrainsurgencia conlleva todo tipo de operaciones especiales y de desestabilización desde fuerzas creadas, adiestradas y armadas de corte paramilitar, algo aparentemente iniciado desde enero o febrero de 1995, cuando se da el reclutamiento del primer grupo paramilitar en el norte de Chiapas. Esto coincide con la mencionada ofensiva militar sorpresiva realizada por Zedillo el 9 de febrero de 1995. Presumiblemente para no parecer débil, algo similar, pero, como puede apreciarse, en una escala mayor, ocurre con Calderón, porque se agregan preparativos y mecanismos tanto estatales como «privados» en la campaña no sólo contra el narcotráfico o la delincuencia, sino para abatir el terrorismo en el contexto de la mencionada campaña desatada por el gobierno de Bush después del 11/9.

Los Estados Unidos, durante el sexenio zedillista, que entrega ferrocarriles, bancos y gas natural, aumentaron su impacto ideológico, financiero, militar, de contrainsurgencia y de lucha contra el narcotráfico, en la dirección y apoyo del aparato de espionaje. Un informe del inspector del Pentágono revela que los militares de los Estados Unidos han gastado millones de dólares aumentando las labores de vigilancia e interdicción en México, sin que se observara reducción alguna del flujo de drogas a los Estados Unidos, y mucho menos el menor esfuerzo por controlar las exportaciones de armamento de todo tipo, incluyendo el de alta potencia, a los cárteles, o los apoyos y operaciones del aparato bancario estadounidense, imprescindible en ese negocio. Aún más, existe un documento confidencial de la Oficina Federal

de Investigaciones (FBI) en el que se argumenta, con datos, sobre cómo «el libre comercio» auspiciado por el TLCAN facilita el tráfico de drogas. El informe indica que porciones del presupuesto federal en drogas se usa para vigilancia militar, y que se cuadruplicó entre 1995 y 1998.

### 3. Calderón avala la integración profunda y la ocupación militar

Con una presencia amplia del aparato de seguridad estadounidense en territorio nacional, con Calderón se agrega la dimensión «antiterrorista» gracias a una serie de atentados que se atribuyó un grupo que ha venido operando en el país en los últimos años, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra instalaciones de Petróleos Mexicanos registrados en Guanajuato y Querétaro en julio de 2007, mismos que ocurren invariablemente en momentos electoralmente cruciales para la derecha, favoreciendo el abstencionismo. Algo que ya había ocurrido en el proceso comicial protagonizado por Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo –las acciones de entonces del EPR representaron el «arranque» de la campaña dedicada a retratar a Cárdenas y al PRD como proclives a la violencia–, y más recientemente en los comicios legislativos de Oaxaca y otros estados. Además de ofrecer la excusa que se requería, por una parte para intensificar el proceso de «criminalización» de la resistencia civil pacífica encabezada por Andrés Manuel López Obrador, los atentados del EPR han sido utilizados por Calderón como justificación para encargar a empresas de seguridad de los Estados Unidos como SY Coleman Corporation la creación y operación de centros de vigilancia aérea para monitorear nada menos que las instalaciones estratégicas del sector petroeléctrico del país, según información ofrecida por Manuel del Río, presidente de la Comisión de Marina del Congreso Mexicano.<sup>5</sup> Se promueve desde el Poder Ejecutivo ocupado por Calderón, la presencia de unidades militares mercenarias de los Estados Unidos

5 Juan Manuel Anguiano: «Contrataron en los Estados Unidos vigilancia para PEMEX», *El Universal*, 12 de septiembre de 2007, p. A12.

en territorio nacional que operarían bajo la cubierta de «empresas privadas de seguridad».

#### 4. La soberanía nacional: El «problema» de fondo

Al analizar los eventos protagonizados por la derecha panista de cara a los atentados contra gasoductos de PEMEX y al «affaire Ye Gon»,<sup>6</sup> que amenaza con minar la justificación oficial de las campañas antinarco y antiterrorista, usadas, como en los Estados Unidos y Canadá, para instaurar un estado policial-militar, recordé la obra del escritor siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989), que combinaba el relato policial con el magistral análisis de las relaciones de poder, la omnipotencia de la mafia, la corrupción política, en relatos que el lector tiene que desenmarañar.

En su novela *El contexto*,<sup>7</sup> Sciascia enseña cómo en toda indagación sobre la violencia individual o política hay que atender a los procesos, al fluído de acontecimientos desde los cuales se desprenden los hechos,<sup>8</sup> sea un acto de corrupción política en la Italia de su tiempo, o el descubrimiento de más de 200 millones de dólares en una casa del empresario Zhenli Ye Gon. Es un flujo al que se agrega 1) que Dick Morris, publicista y operador de la «guerra sucia» en las elecciones de 2006, fue contratado de nuevo por Calderón para tapan el *affaire Ye Gon* y, según Andrés López Obrador, «es quien recomendó que las explosiones de PEMEX» se atribuyeran al EPR; y 2) que Ye Gon reveló que «estos son y fueron fondos secretos del partido político (PAN) usados para la campaña presidencial mexicana, para comprar armas y financiar actividades terroristas», lo que deja muchas preguntas que exigen una investigación seria sin evadir asuntos centrales como:

6 Me refiero al hallazgo de poco más de doscientos millones de dólares en efectivo en una casa del empresario mexicano de origen chino, Ye Gon, en un barrio de altos ingresos de la Ciudad de México, presumiblemente producto de operaciones realizadas en sus empresas farmacéuticas con drogas ilegales.

7 Leonardo Sciascia: *El contexto*, España, Bruguera, 1971.

8 *Ibid.*, p. 53.

¿a través de qué mecanismos y con quiénes se acumularon tantos millones de dólares? Lo que nos remite a los oscuros entramados del poder, el narcotráfico, la «seguridad nacional» y los instrumentos «privados» usados para crear eventos de corte terrorista tipo 11/9.

A partir de un sólido análisis de Carlos Fazio<sup>9</sup> sobre la violencia «en sus dos variables, estatal y revolucionaria», se detecta que el fracaso de la «guerra antinarco» desatada por el régimen para generar capital político, con más de mil muertos en los primeros cinco meses del año y un visible desgaste del Ejército, permanece como «carta de juego», pero se la desaceitera y se pasa, sin dilación, a jugar la carta «antiterrorista», para persistir con la represión, desarticulando la oposición político-electoral (criminalizándola junto a un amplio espectro de movimientos sociales), y para impulsar operaciones de «integración profunda» con los Estados Unidos y Canadá, por la vía de empresas y contratistas de «seguridad», un esquema ampliamente desarrollado en el proceso de ocupación de Iraq, donde hay más contratistas en labores de seguridad y apoyo logístico, que tropas.

De comprobarse su veracidad, el «affaire Ye Gon» es un ejemplo sobre el *modus operandi* del financiamiento subrepticio de operaciones clandestinas de provocación-represión como las que ocurrieron en los comicios de 2006 en México. El caso «Irán-contras» muestra que no es nuevo el uso de agentes privados para garantizar la independencia financiera y autonomía operativa de grupos clandestinos, como los Proactive, Preemptive Operations Groups (P2OG) auspiciados por el Pentágono entonces bajo Rumsfeld, cuya misión *se centra en la manufactura de eventos terroristas*. Se trata de la «estrategia de la tensión» a la que es adicta la derecha. Y no es ficción: el relato de Sciascia dejó de serlo tan pronto Giulio Andreotti, el conocido ex primer ministro italiano, reconoció el uso de esa «estrategia» (asesorado por la CIA, el Pentágono y la OTAN) consistente en asaltos, balaceras, incendios, ataques terroristas, etcétera, realizados por, o atribuidos a, brigadas «rojas», para justificar la represión de fuerzas progresistas.

9 En *La Jornada*, 16 de julio de 2007.

La sospecha de su uso aquí es mayor porque el sabotaje contra PEMEX se hizo al estilo de 11/9, en medio de una inexplicable pasividad de los dispositivos disponibles para evitarlos y cuando ya Calderón había solicitado «ayuda» a los Estados Unidos para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAP) —establecido por decreto— para coadyuvar «en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden». Una iniciativa bien recibida por un Bush devastado en política y en las encuestas, que arrastra a la derecha al fracaso en 2008. Como para recomponer el panorama el Pentágono advirtió sobre inminentes y destructivos ataques terroristas en los Estados Unidos.

Por lo que conviene indagar sobre la vinculación entre los ataques a PEMEX y el «antiterrorismo» remozado de Bush y Calderón. Y lo que se «devele» sobre los orígenes y destinos de los 205 millones. Entre otras razones porque las «fuerzas especiales» tipo P2OG operan de manera autónoma. Esa «independencia», al decir de M. Chossudovsky, está en la naturaleza misma de la operación encubierta, «en la que el *asset* no está en contacto con su promotor ni es necesariamente consciente del papel que juega a favor de quienes lo auspician».<sup>10</sup> En este «contexto» cobra significado el apoyo de la secretaria de Estado Condoleezza Rice al CFAP cuando dijo que «la relación con México es amplia, pero obviamente la seguridad ha tomado un papel mayor». Se trataría del encadenamiento de actos terroristas para afianzar a la derecha en el poder e inducir la «integración profunda» México-Estados Unidos-Canadá, impulsada por el Foreign Relations Council y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, con graves riesgos para el futuro soberano del país. El asunto es grave, porque a la incertidumbre generada por el comportamiento faccioso del entonces presidente Vicente Fox a favor de Calderón en los procesos comiciales, se agrega la percepción de

10 Michel Chossudovsky: *America's, War on Terrorism*, Montreal, Global Research, 2005. Me he referido al asunto en mi libro *Terror e imperio*, México, Random House, 2006. Más detalles en [www.jsaxef.blogspot.com](http://www.jsaxef.blogspot.com)

su ilegitimidad acrecentada ahora por información que confirma la decisión del gobierno calderonista de contratar a empresas estadounidenses la vigilancia de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente en Veracruz, donde el 10 de septiembre el EPR detonó explosivos en gasoductos de PEMEX, algo insólito porque, según la normatividad constitucional vigente y la Ley de Seguridad Nacional, la vigilancia y resguardo de toda la infraestructura estratégica del país corresponde de manera exclusiva al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de México. La ley mencionada establece como una amenaza a la seguridad la derivada de actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Con una atmósfera enrarecida por acciones que fácilmente pueden catalogarse de deslealtad de Calderón a la nación, Del Río puntualiza que la contratación con SY Coleman Corporation fue realizada poco después y bajo el impulso de los ataques del EPR realizados en julio de 2007.

En entrevista con *El Universal*, el diputado, demasiado «cauteloso» dado lo que está en juego, agregó que se trata de un asunto «complejo» porque no se limita a sólo vigilar y dar seguridad, «sino de revelar dónde están nuestros puntos estratégicos a intereses de otros estados. Ese es el problema de fondo».<sup>11</sup>

La información ofrecida por Anguiano indica que desde el 9 de agosto SY Coleman Corporation —fundada en 2002 y dedicada a ofrecer servicios y productos militares, principalmente en el área de vigilancia del espacio aéreo y defensa antimisiles— lanzó una convocatoria para reclutar a ex militares estadounidenses con más de tres años de experiencia en pilotaje de helicópteros y vuelo de aeronaves no tripuladas, similares a las que utiliza el gobierno de los Estados Unidos en la frontera con México, equipadas con la tecnología más avanzada para la captura y transmisión de fotos e imágenes de video en tiempo real.<sup>12</sup> Los candidatos deben ser bilingües y tener experiencia en la operación y mantenimiento de

11 Citado en Juan Manuel Anguiano: Ob. cit. (en n. 5).

12 Ídem.

helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y aeronaves de «ala fija», y conocer además los protocolos de seguridad aérea para clientes de Centro y Suramérica. La oferta específica para el reclutamiento de mercenarios indica que es para trabajar «con personal de seguridad mexicano para la protección de infraestructura» en Veracruz.<sup>13</sup> Los vínculos de esa empresa con el aparato de seguridad de los Estados Unidos, en especial con el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, son estrechos, por lo que el general mexicano Roberto Badillo Martínez (diputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI), secretario de la Comisión de Defensa del Legislativo, plantea la necesidad de exigir al gobierno de Calderón una explicación del posible ingreso

13 Juan Manuel Anguiano: Ob. cit. (en n. 5)

de ex militares estadounidenses para operaciones de vigilancia en territorio nacional:

Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo xx permitió la entrada de tropas estadounidenses, ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores [...]. // [...] el presidente Felipe Calderón debe explicar si su gobierno ha firmado algún convenio comercial con empresas de seguridad e inteligencia estadounidenses, pues se trata de una violación a la soberanía y una ofensa al Ejército Mexicano.<sup>14</sup>

Ciudad Universitaria, 13 de septiembre de 2007 

14 Juan Manuel Anguiano: Ob. cit. (en n. 5).



DIEGO RIVERA: *Fraternidad* (mural, detalle), 1928